



C

ANA MARÍA LÓPEZ NARBONA | JOAQUÍN CASTILLO DE MESA | PABLO ÁLVAREZ-PÉREZ | JORGE MANUEL FERREIRA
LUZ MERCEDES VERDUGO ARAUJO | LEONOR TERESO RAMÍREZ | LUIS ALBERTO VELARDE OSUNA
ROCÍO LÓPEZ-GARCÍA-TORRES | ELIA SANELEUTERIO

Proceso de implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre como estrategia comunitaria para abatir la inseguridad alimentaria

Implementation process of the National Crusade against Hunger as a community strategy to reduce food insecurity

Luz Mercedes Verdugo Araujo*, Leonor Tereso Ramírez** y Luis Alberto Velarde Osuna***

* Universidad Autónoma de Sinaloa. luzmercedesverdugo@hotmail.com

** Universidad Autónoma de Sinaloa. leonorteresoramirez@hotmail.com

*** Universidad Autónoma de Sinaloa. lvelarde@uas.edu.mx

Abstract:

This article is the result of an investigation into the discursive contradictions of the implementation process of the National Crusade against Hunger food policy as a community strategy; aiming to evaluate its implementation process to find the obstacles that limit its efficiency. The research design proposes a mixed methodology using descriptive statistics and critical hermeneutics from a descriptive, interpretive and explanatory study. The study subjects were 63 beneficiaries of 27 canteens that operate in the city of Culiacán, Sinaloa, Mexico and 27 community mediators who are operators of the social program and who belong to the localities where the canteens are inserted. Among the results are the need for food policies that respond to the sociocultural context where they are being implemented and operation mechanisms based on interactive communication between social actors.

Keywords: implementation, National Crusade against Hunger, food policy, food insecurity.

Resumen:

Este artículo es resultado de una investigación sobre las contradicciones discursivas del proceso de implementación de la política alimentaria Cruzada Nacional contra el Hambre como estrategia comunitaria; teniendo como objetivo evaluar su proceso de implementación para encontrar los obstáculos que limitan su eficiencia. El diseño de la investigación propone una metodología mixta utilizando la estadística descriptiva y la hermenéutica crítica desde un estudio descriptivo, interpretativo y explicativo. Los sujetos de estudios fueron 63 beneficiarios de 27 comedores que operan en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México y 27 mediadoras comunitarias que son operadoras del programa social y que pertenecen a las localidades donde están insertos los comedores. Dentro de los resultados se encuentran la necesidad de políticas alimentarias que respondan al contexto sociocultural

donde está siendo implementadas y mecanismos de operación basados en una comunicación interactiva entre los actores sociales.

Palabras clave: implementación, Cruzada Nacional contra el Hambre, política alimentaria, inseguridad alimentaria.

Article info:

Received: 01/12/2020 / *Received in revised form:* 23/12/2020

Accepted: 27/12/2020 / *Published online:* 31/01/2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.5944/comunitania.21.4>

1. A modo de introducción: Estado y política alimentaria: desarrollando una estrategia comunitaria para erradicar la inseguridad alimentaria

El Estado para lograr legitimidad utiliza el discurso político de velar por las necesidades de la sociedad y asume determinados modelos de construcción de políticas públicas y específicamente de políticas sociales que le permiten reproducir prácticas hegemónicas para seguir teniendo el monopolio de la violencia legítima. Las características de esas políticas se basan en un sistema de bienestar social (sea de salud, alimentación, educación, vivienda y servicios públicos, entre otros) que le ayudan a mantener consenso y ser legitimadas políticamente por las clases sociales. Para De la Rosa (2004) el Estado ha asumido diferentes enfoques de políticas públicas de acuerdo con el modelo económico que adopte. En el Estado de bienestar las políticas sociales fueron universales, de carácter no contractual y constitutivo de derecho de ciudadanía, un poder centralizado y una relación pasiva-clientelar en la población beneficiaria de los programas sociales. Estas políticas fueron señaladas por los neoliberales de contribuir a propiciar el vaciamiento de fondos públicos malgastados en actividades burocratizadas sin retorno y que extienden su cobertura a toda la población de manera indiscriminada, así como solución parcial de la crisis capitalista.

Debido a esto, el neoliberalismo buscó la reconfiguración del mercado reduciendo la intervención social del Estado en diversas áreas y actividades. El criterio universal es cambiado por el de focalización, donde el propio usuario es responsabilizado. En este sentido Montaño (2015), señala que hay un criterio de precarización de las políticas sociales con programas de combate contra el hambre y la miseria, financiados en parte por las donaciones de la sociedad civil y con aportes de las clases trabajadoras: las rentas obtenidas a partir de los ajustes al salario, las reformas pensionales, la flexibilización de las leyes laborales, etc. Estos cambios en el enfoque de la política pública posibilitó ajustes en el tema alimentario, ya que los implementadores de la política alimentaria, quienes habían desarrollado programas asistenciales y de apoyos universales al consumo, transformaron sus acciones en atención a las demandas y consumo focalizado en grupos vulnerables. Ante este panorama Arteaga (2012) señala que los nuevos mecanismos de operación de la política social

neoliberal no generaron los cambios esperados en el crecimiento económico, empleos y reducción de la pobreza.

Para el Fondo Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria Nutricional (2012), esta situación puso a tambalear al Sistema Alimentario Mexicano, el cual se encuentra actualmente en el peor de los escenarios posibles, ya que no sólo ha perdido la capacidad de generar los alimentos que la población requiere, sino que ha perdido la soberanía sobre la conducción estratégica del sector alimentario, la cual ahora está en manos de empresas trasnacionales. Esta crisis no sólo ha generado el empobrecimiento del medio rural, sino que ha profundizado la desigualdad social, en condiciones de estancamiento económico. La renuncia del Estado a intervenir en la conducción del sector alimentario ha permitido la adopción de patrones alimentarios profundamente dañinos para la salud de la mayoría de la población, agravada en los extractos económicos más pobres que continúan padeciendo desnutrición en las primeras etapas de vida y a partir de la edad escolar se vean inmersos en un ambiente obesogénico con graves repercusiones en la salud.

Por otra parte, analizando datos estadísticos de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública en la *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición* (2012), en México el 70.0% de los hogares se clasificaron en alguna de las tres categorías de inseguridad alimentaria: 41.6% en inseguridad leve, 17.7% en inseguridad moderada y 10.5% en inseguridad severa. El 80.8% de los hogares que viven [sic] en el estrato rural fueron clasificados en algún nivel de inseguridad alimentaria: 45.2% en leve, 22.4% en moderada y 13.0% en severa. En el estrato urbano se observó una prevalencia de inseguridad alimentaria de 67.0% (40.6% en inseguridad leve, 16.5% en moderada, 9.7% en severa). En cuanto a Sinaloa, la prevalencia de inseguridad alimentaria, en cualquiera de sus categorías, fue de 66.7%: 43.9% en inseguridad leve, 15.0% en inseguridad moderada y 7.9% en inseguridad severa. Al aplicar factores de expansión, esta información representó 458.700 hogares que se percibieron con inseguridad alimentaria. Al desagregar la información por área de residencia, se observó una tendencia hacia una mayor prevalencia de hogares en inseguridad alimentaria en las áreas rurales (76.1%: 48.3% en inseguridad leve, 19.7% en moderada y 8.1% en severa) en contraste con las áreas urbanas, que fue de (63.6%: 42.4% en inseguridad leve, 13.4% en moderada y 7.9% en severa) (p. 144).

En el Estado de Sinaloa, México; el principal programa para erradicar la situación de inseguridad alimentaria es la Cruzada Nacional contra el Hambre operando a través de la estrategia Comedores Comunitarios. Su objetivo se enfoca en proporcionar alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficientes a grupos poblacionales con problemas de desnutrición o en riesgo de padecerla y que presentan inseguridad alimentaria, a partir del fomento de la participación comunitaria. Con ello busca contribuir a abatir la carencia por acceso a la alimentación. Dicho programa opera en diez municipios de Sinaloa: Ahome, Guasave, Sinaloa, Culiacán, El Fuerte, Choix, Navolato, Mazatlán, Mocorito y Badiraguato. En el caso del municipio de Culiacán

opera en más de 1000 colonias. En este contexto, es necesario analizar cómo se va desarrollando, cuáles son sus objetivos, estrategias, si hay correspondencia con el discurso oficial y su operación y en qué medida sirve como garante para atenuar la situación de inseguridad alimentaria. Asimismo, identificar su modelo teórico y metodológico de actuación y cómo se dan las relaciones entre los diferentes actores sociales involucrados, si hay una comunicación dialógica entre los implementadores y los beneficiarios.

2. Metodología

El estudio es de carácter descriptivo, interpretativo y explicativo desde un método mixto secuencial que retoma elementos de la estadística descriptiva y la hermenéutica crítica. Dicho diseño metodológico utilizó técnicas como la observación participante, la entrevista semiestructurada y la encuesta para posteriormente sistematizar los datos a través del análisis de discurso y de contenido del que surja una propuesta de investigación para mejorar las intervenciones alimentarias. La propuesta de una complementariedad metodológica significa para esta investigación establecer una relación dialógica entre la comprensión y la explicación del fenómeno de la política alimentaria. Esto es la inmersión de las especificidades y las posibles utilidades al generar trazos que fortalecen lo conceptual, generen descripciones y explicaciones que permiten plantear propuestas para detallar el problema y ofrecer alternativas.

El enfoque cuantitativo enfatiza en la medición objetiva (de los hechos sociales, opiniones, actitudes individuales) y la demostración de la causalidad. Para Cea D'Ancona (1996) la recogida de información es estructurada y sistemática. El análisis estadístico permitió cuantificar la realidad social, las relaciones causales y su intensidad. En el componente cuantitativo se utilizó una estadística descriptiva donde se encontraron frecuencias sobre la opinión, participación del programa, rasgos de implementación e impacto en la población beneficiaria. Por otra parte el enfoque cualitativo, desde Alguacil (2011), se preocupa por los aspectos simbólicos y subjetivos que constituyen comportamientos sociales y que mueven a la sociedad desde el punto de vista de los significados que los sujetos y los grupos dan a su vida en sociedad. Se utilizó una hermenéutica crítica recurriendo como medio al lenguaje y los discursos que expresan las cualidades que los sujetos dan a los fenómenos sociales que experimentan. La hermenéutica crítica usa la conversación con la intención de profundizar en lo subyacente de los comportamientos sociales, ya que son los que construyen el mundo social.

Este diseño posee la conjugación de distintos actores sociales que tienen variedades discursivas en el terreno del proyecto político. Se cuenta con las mediadoras comunitarias que tienen la función de implementar la política en la localidad y donde recae el peso mayor para lograr el impacto. Se utilizó un censo con las mediadoras

ya que se trabajó con todas las que están en el municipio de Culiacán, Sinaloa, México; por lo tanto se contó con 27 sujetas clave a las que se les aplicó una encuesta. Posteriormente con las 27 mediadoras se usó un muestreo de juicio el cual es concebido por Mejía (2000) como un procedimiento que consiste en una selección de las unidades a partir de criterios conceptuales, de acuerdo con los principios de representatividad estructural; es decir, las variables que delimitan la composición estructural de la muestra son definidas de manera teórica por el investigador. Se consideró solo aquellas que participan de manera constante y que tienen un lapso mayor a seis meses a cargo de un Comedor Comunitario para la aplicación de una entrevista semiestructurada con la finalidad de conocer a profundidad los procesos de implementación del programa teniendo como resultado 5 mediadoras comunitarias.

Por último, se encuentra a los beneficiarios que son la parte medular del problema y donde se establecen criterios muestrales por tratarse de una población mayúscula. Se aplicó una muestra probabilística basada en un aleatorio simple a los 810 beneficiarios que asistieron a los 27 Comedores Comunitarios. Desde criterios operativos, se precisa que se obtendrá una muestra de los 810 beneficiarios con un 90% de confiabilidad y 10% de error, con una Z de 1.645, una $p=0.5$ y $q=0.5$, el resultado fueron 63 sujetos de estudio.

3. Las voces de la mediadora comunitaria y de los beneficiarios sociales

En los hallazgos se encuentra a dos actores sociales que viven y sienten los efectos de la política alimentaria en la cotidianidad del Comedor Comunitario. Por una parte, está la voz de la mediadora comunitaria, que es la encargada del funcionamiento del espacio del Comedor Comunitario en la localidad y los destinatarios finales de la política, que son los beneficiarios. En el primer momento, se les aplicó una encuesta para conocer las valoraciones que tienen sobre el proceso de implementación retomando las cinco dimensiones señaladas por Van Meter y Van Horn (1975), las cuales son normas y objetivos, recursos de la política, comunicación entre las organizaciones, características de las instancias y actitud de los implementadores. Cada una de estas dimensiones contó con dos ítems. En las normas y objetivos se les pidió que evaluaran las normas de selección y el cumplimiento de los objetivos. En los recursos de la política valoraron la calidad de los apoyos recibidos y el espacio del Comedor Comunitario. En la comunicación entre las organizaciones evaluaron la comunicación que tiene con los implementadores y en el interior del comedor. En las características de la instancia evaluaron la participación de los beneficiarios y los mecanismos de implementación, y por último en la actitud de los implementadores evaluaron la capacidad de liderazgo y organización. La encuesta está compuesta por una tabla valorativa con una escala de Likert de cinco niveles valorativos que van de Muy Bien, Bien, Regular, Mal y Muy Mal.

TABLA 1: Dimensiones del proceso de implementación

Dimensiones	Ítems	Valoraciones Mediadora N= 27				Valoraciones Beneficiario N= 63					
		Muy bien	Bien	Regular	Mal	Muy Mal	Muy bien	Bien	Regular	Mal	Muy Mal
Normas y objetivos	Normas de selección	0	44.4	29.6	18.5	0	1.6	1.6	4.8	6.3	3.2
	Cumplimiento de objetivos	0	7.4	51.9	29.6	11.1	4.8	9.5	30.2	39.7	4.8
Recursos de la política	Apoyos recibidos	0	33.3	40.7	25.9	0	20.6	14.3	31.7	11.1	22.2
	Calidad de los espacios	25.9	51.9	22.2	0	0	7.9	30.2	19	31.7	11.1
Comunicación entre las organizaciones	Comunicación con los implementadores	0	7.4	51.9	29.6	11.1	6.3	31.7	50.8	7.9	3.2
	Comunicación con los beneficiarios	18.5	59.3	18.5	3.7	0	3.2	54	34.9	6.3	1.6
Características de las instancias	Participación de los beneficiarios	3.7	3.7	33.3	51.9	7.4	11.1	6.3	39.7	19	23.8
	Mecanismos de implementación	0	11.1	40.7	40.7	7.4	19	50.8	19	7.9	3.2
Actitud de los implementadores	Gestión de los implementadores	0	3.7	33.3	33.3	29.6	15.9	31.7	41.3	6.3	4.8
	Organización de los implementadores	3.7	11.1	37	33.3	14.8	4.8	41.3	46	3.2	4.8

Fuente: elaboración propia (2018).

En la tabla 1, se puede apreciar que la mayoría de las mediadoras conocen las normas de selección y las valoran de manera propositiva. En cuanto al cumplimiento de los objetivos, la mediadora considera que el programa presenta limitaciones para lograr objetivos; este mismo patrón lo encontramos en la comunicación que tiene con los implementadores que va de regular a muy mal, en los mecanismos de implementación y la organización de los operadores. Sin embargo, los porcentajes que más destacan es la participación que tienen los beneficiarios en el programa, la cual está valorada negativamente va de Mal a Muy Mal y la organización que tiene los implementadores. No obstante cabe precisar que la calidad de los espacios y la comunicación que hay entre la mediadora comunitaria y el beneficiario son valoradas positivamente, ya que los porcentajes más representativos van de Muy Bien a Bien. De manera

general se precisa que la mediadora comunitaria tiene una mala apreciación del proceso de implementación, sobre todo en la valoración de las funciones de los implementadores, ya que se detallan tensiones con los operadores institucionales.

TABLA 2: Medias y desviaciones típicas de las dimensiones del proceso de implementación

Dimensiones	Ítems	Mediadora n = 27	Beneficiario n = 63	F	P	η^2
		M (DT)	M (DT)			
Normas y objetivos	Normas de selección	2.72(.79)	3.45(1.21)	4.07	.037	.037
	Cumplimiento de objetivos	2.55(.80)	2.66(.93)	.250	.618	.011
Recursos de la política	Apoyos recibidos	3.07(.78)	3.00(1.41)	.065	.799	.068
	Calidad de los espacios	4.03(.70)	2.91(1.19)	20.53	.000	.216
Comunicación entre las organizaciones	Comunicación con los implementadores	2.55(.80)	3.30(.83)	15.44	.000	.013
	Comunicación con los beneficiarios	3.92(.72)	3.50(.73)	6.10	.015	.004
Características de las instancias	Participación de los beneficiarios	2.44(.84)	2.61(1.23)	.447	.506	.007
	Mecanismos de implementación	2.55(.80)	3.74(.89)	31.59	.000	.313
Actitud de los implementadores	Gestión de los implementadores	2.11(.89)	3.47(.99)	37.62	.000	.219
	Organización de los implementadores	2.55(1.01)	3.38(.83)	16.29	.000	.141

Fuente: elaboración propia (2018).

En cuanto a las valoraciones realizadas por el beneficiario, encontramos las siguientes apreciaciones sobre el proceso de implementación de la política alimentaria. Sólo el 17.5% conoce las normas de selección y las evalúan de manera negativa, así como el cumplimiento de los objetivos, pues consideran que aun cuando el programa es propositivo no podrá erradicar la situación de inseguridad alimentaria. Hay diferentes valoraciones sobre la calidad de los apoyos recibidos; en el caso de los beneficiarios, evalúan la calidad del alimento recibido, ya que consideran que nutrimentalmente el alimento es bueno, pero no forma parte de sus preferencias alimentarias. Evalúan su participación en el programa de manera negativa estando los resultados posicionados de regular a Muy Mal. En cuanto a la apreciación que tiene respecto a los implementadores, evalúan de manera positiva los mecanismos de operación, así como la gestión y la organización que desarrollan en el proceso de implementación. Lo evalúan así pues consideran a la parte implementadora como la imagen de la mediadora comunitaria; ellos no alcanzan a ver los operadores institucionales, por lo cual están evaluando las funciones de la líder del comedor. Hay variaciones sobre las percepciones de la calidad de los espacios del comedor, pues

consideran que las ubicaciones no son las más idóneas. Integrando ambos discursos encontramos las siguientes medias que hablan de las relaciones, así como sus diferencias.

En lo que concierne a las dimensiones de evaluación del proceso de implementación, se puede destacar lo siguiente. En concreto, se encontraron diferencias significativas en la dimensión de normas y objetivos. De esta manera, al evaluar la selección de normas del programa ($F(4.07)$, $p = .037$, $\eta^2 .037$) entre las mediadoras y beneficiarios ($M = 2,72$ $DT = .79$ vs $M = 3,45$ $DT = 1.21$). Resulta interesante (cuadro 2) que 44.4% de las mediadoras valoran positivamente los objetivos y normas del programa. Contrariamente a lo que expresan los beneficiarios (9,5%), que las evalúan de forma negativa. Este resultado puede obedecer a que el endogrupo de las mediadoras es el que pertenece a la estructura gubernamental, misma que legitima dicho programa. Por su parte, el exogrupo de los beneficiarios percibe que las normas y objetivos no se cumplen en las prácticas cotidianas; por ejemplo, la alimentación no es la adecuada, existe mala infraestructura, y lo más relevante, los criterios de selección no son los correctos (atienden a todos por igual). En cuanto a los recursos de la política, no se encuentran diferencias significativas en los discursos, ya que ambos evalúan de manera regular; sin embargo, en cuanto a la calidad de los espacios, hay diferencias muy importantes ($F(20.53)$, $p = .000$, $\eta^2 .216$) entre las mediadoras y beneficiarios ($M = 4,03$ $DT = .70$ vs $M = 2,91$ $DT = 1.19$). Esto significa que los beneficiarios encuentran mala calidad en los espacios donde opera el programa, como mala ubicación y falta de higiene.

En cuanto a la comunicación entre las organizaciones, la parte de la relación con los beneficiarios no refleja diferencias, pues ambas la valoran positivamente: 51.9% de las mediadoras y 54% de los beneficiarios. Sin embargo, existen diferencias en la comunicación entre los implementadores ($F(15.44)$, $p = .000$, $\eta^2 .013$) entre las mediadoras y beneficiarios ($M = 2,55$ $DT = .80$ vs $M = 3,30$ $DT = .83$). Esto se debe a que la mediadora tiene interacciones conflictivas con los encargados por los mecanismos de implementación, gestión y organización, como se pudo observar en el trabajo de campo. Sin embargo los beneficiarios evalúan de forma regular a Muy Bien porque consideran a la mediadora como la parte implementadora y sus respuestas se ven condicionadas por la presencia de la líder del comedor. En cuanto a las características de la instancia encontramos la dimensión de participación la cual a pesar de que no hay diferencias significativas entre el discurso de la mediadora y los beneficiarios, nos señala que la participación es Mala. La participación está determinada por los gustos y preferencias alimentarias y por los precios de los alimentos (sobre todo para las familias extensas).

En cuanto a los mecanismos de implementación, observamos diferencias marcadas en los discursos ($F(31.59)$, $p = .000$, $\eta^2 .313$) entre las mediadoras y beneficiarios ($M = 2,55$ $DT = .80$ vs. $M = 3,74$ $DT = .89$) se refleja como las mediadoras evalúan más críticamente el proceso de implementación, los evalúan de forma negativa;

este mismo patrón de discurso se repite en la dimensión de la actitud de los implementadores en los ítems de gestión y organización de los implementadores. Si bien es verdad que los sujetos plantearon un cierto tipo de respuestas; como era de esperarse se presentaron ciertas contradicciones al evaluar el programa de la Cruzada Contra el Hambre entre los beneficiarios y las mediadoras. También es verdad que estas respuestas obedecen a criterios de pertenencia grupal. En este sentido, el siguiente apartado se propone profundizar en las respuestas y discursos que ambos grupos tienen sobre el programa evaluado. De esta manera, se pretende evidenciar y explicar de dónde surge, se desarrollan y establecen las contradicciones encontradas en este apartado.

Desde los marcos del proceso de implementación se observa que el término funcionalidad política está presente en las expresiones de los operadores. Esta funcionalidad política basa su discurso normativo en lo que llama Muñoz (2005) idea clásica de bien común, que es el gran patrimonio de la democracia frente a los despotismos y autoritarismos. Esta funcionalidad desde este lema traza las líneas de un discurso normativo que en el plano social trae significaciones de atención de la inseguridad alimentaria desde prácticas inmediatistas de asistencia social, que resuelven de manera pragmática el hambre, es decir, desde una racionalidad técnica.

Basa el funcionamiento de su proyecto en valoraciones cuantitativas caracterizadas por la entrega de despensas alimentarias en los comedores comunitarios cada mes, controlando padrones de beneficiarios importando más el número de personas atendidas, a las que se ha beneficiado con dichas despensas. Sin embargo, deja de lado características cualitativas de los sujetos que reciben los alimentos y la calidad de los recursos entregados. Estos elementos demarcan rasgos de una funcionalidad política resquebrajada que basa sus argumentos discursivos en cantidades, pero descarta las cualidades de las dimensiones del proceso de implementación, lo que provoca contradicciones internas y externas en el proyecto político. Estos aspectos se visualizan al analizar los criterios de selección de beneficiarios.

Aun cuando en un momento cuantitativo ellas evalúan de manera idónea las normas de selección hay rasgos contradictorios y reconocen que una funcionalidad del programa implica seguir criterios focalizados de atención, pero en la ruta práctica se selecciona la atención a todo el público en general. Las mediadoras comunitarias señalan en la entrevista que el criterio de selección es atender a cualquier persona sin distinción:

Aquí cualquiera que traiga dinero para comer, come; no hay distingo. Yo sólo quiero que salga la inversión. (E. M. C. 3)

Se precisa cómo no se dispone de criterios bien definidos en el campo de la acción política sobre las normas de selección de beneficiarios. Es una política donde

cualquier sujeto con capacidad monetaria puede acceder a la alimentación, por lo cual el proyecto político confronta personas exigentes con personas que realmente tienen necesidades en el comedor. Se ven mujeres madres de familia con sus hijos en el comedor, personas de la tercera edad y personas que trabajan en instituciones o empresas alrededor que llegan a comer al espacio. Anteriormente había un discurso de selección destinada a la pobreza extrema, un discurso político que respondía a la situación de hambre que presentan los grupos vulnerables, pero al contrario existe un argumento de una política de recepción abierta donde participan las personas que tienen acceso económico para comprar el alimento del comedor. En sus discursos argumentan el porqué de su actuación:

Los que nos pusieron el comedor nos piden cuentas y les damos listado de personas a las que atendemos y tengo que hacer el trabajo; por eso atiendo al que venga; necesito llenar las listas, de eso dependen muchas cosas. (E. M. C.4)

Desde el discurso se traza la importancia que tiene el número en la funcionalidad política, lo que lleva a contradicciones en el momento de llevar a cabo los criterios de selección. Esto pone a tambalear a los implementadores, quienes tienen un discurso aprendido y socializado sobre el abatimiento del hambre. Asimismo, los datos cualitativos arrojan un desencanto por los apoyos que reciben por el programa; en sus discursos externan que son apoyos institucionales limitados, por lo que se vislumbra los bordes de una política residual:

Sólo nos pusieron el comedor y ya no vinieron. Sólo viene la de la despensa del DIF una vez al mes y no las cobran; además, con lo de las votaciones ya tenía dos meses que no venían. Fuera de eso, nada de apoyo. Me da coraje tanto logo de instituciones pintados en la fachada del comedor, como si nos apoyaran. El apoyo al comedor se limita al otorgamiento y acondicionamiento del Comedor Comunitario. Así como la entrega mensual de una despensa que tiene un costo de 200 pesos que contiene alimentos básicos: arroz, frijol, aceite, garbanzo, azúcar, sopa, leche, etcétera. Sin embargo, los gastos de manteamiento corren a cargo de las mediadoras comunitarias. (E. M. C. 5)

Desde el discurso oficial se contaba con una política integrativa entre la parte ejecutora y la parte operativa comunitaria, pero se demarca una contradicción de una política de apoyo restringido. Se vislumbra cómo existe la utopía de una política integrativa a la sombra de una política de apoyo limitado. Estas limitaciones del discurso normativo basado en la funcionalidad política hacen que la mediadora comunitaria asuma un discurso mediador de representación comunitaria como la organizadora social y la administradora de los recursos, los cuales, desde su postura, son escasos e insuficientes. Sin embargo, estos elementos representan factores de la misma estructura de la institución política. No obstante, se configura otro discurso en el terreno social de la acción política, que representa otro tipo de factores relacionados con elementos simbólicos de aprendizaje sociocultural que detallan aspec-

tos de un discurso condicionado de los beneficiarios. En dicho discurso argumentan la manera en que su participación está condicionada por rasgos socioculturales de alimentación y del contexto.

Las personas que vienen al comedor comunitario solo asisten cuando hay comida al gusto de su paladar, comida llenadora, cuando hay caldos no vienen, e incluso mandan preguntar con sus hijos cual será el menú del día y eso determina su participación. (E. M. C. 1)

Como muestra el discurso anterior la participación en el programa dependerá en gran manera del producto que reciban al interior del comedor. Por lo tanto se cuenta con un discurso condicionado que obedece a sus gustos y preferencias alimentarias. Por lo tanto es necesario que la política alimentaria vaya acompañada de una orientación alimentaria y un conocimiento de dichas determinantes socioculturales.

4. Conclusiones

- Se detectan contradicciones entre el discurso político y la acción del proceso de implementación, pues no hay criterios de selección en la población objetivo (se atiende a todos por igual). Existe ocultamiento de información por las instituciones implementadoras y los padrones de beneficiarios no son los correctos, lo que no permite la necesaria transparencia en el conocimiento del funcionamiento. Asimismo, existen apoyos limitados en los recursos de la política y no hay mecanismos idóneos de implementación, gestión y organización.
- La política refleja formas verticales de operación donde hay interacciones conflictivas entre los actores sociales. Los mecanismos de comunicación no establecen sinergias en los participantes.
- A pesar de que el programa político en el discurso señala que la política rescata la sabiduría popular de las comunidades, no contempla determinantes socioculturales del consumo y el contexto, los cuales determinan la participación de los beneficiarios al programa. Al no responder a las necesidades, los esfuerzos se diluyen, pues no se dispone de diagnósticos previos sobre las prácticas culturales de alimentación, por lo que un programa social no puede aplicarse de un espacio a otro sin sufrir modificaciones, ya que la realidad alimentaria tiene connotaciones diferentes. Asimismo, el programa no va acompañado de orientación alimentaria que permita hibridar las preferencias alimentarias con los alimentos «sanos» que proporcionan en el Comedor Comunitario.
- Si bien el programa busca atenuar la situación de inseguridad alimentaria, la mayoría de los actores sociales no ha notado cambios significativos en su vida desde la apertura del comedor; considera que es algo propositivo, pero que no abatirá con el problema del hambre. El programa sigue reproduciendo los esquemas operativos, que se caracterizan por la entrega de satisfactorios ali-

mentarios pragmáticos, que si bien resuelven de manera momentánea, no erradican de manera estructural la situación de inseguridad alimentaria, por lo que siguen siendo prácticas paliativas.

5. Referencias

Arteaga, B. C. 2012. *Políticas públicas y participación ciudadana*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Alguacil, G. J. 2011. *Cómo se hace un trabajo de investigación en sociología*. Madrid: Catarata.

Cea D' Ancona, M. 1996. *Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social*. Madrid: Síntesis Sociología.

De la Rosa, R. J. 2004. "¿Quién elabora las políticas sociales en México?" *Revista Sociológica* 19(54): 249-257.

Fondo Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional. 2012. "Elementos sustantivos para la construcción de una política pública alimentaria." México: Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional del IMSS. Consultado el 18 de agosto de 2020 (http://www.nutricionenmexico.com/documentos/Foro%20Nacional%20Nutrici%F3n%20y%20Alimentacion%2016_OCT_2012.pdf).

Mejía, N. J. 2000. "El muestreo en la investigación cualitativa." *Revista Investigaciones Sociales IV* (5): 165-180.

Montaño, C. 2015. "Pobreza, cuestión social y las formas de afrontarla." *Cuadernos de Trabajo Social* 28(2): 161-174.

Muñoz, B. 2005. *Modelos culturales: teoría sociopolítica de la cultura*. México: Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana.

Secretaría de Salud e Instituto Nacional de Salud Pública. 2012. "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición." México. Consulta 24 de agosto de 2020 (<https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2012/doctos/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf>).

Van Meter, D. y Van Horn, C. 1975. "The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework." *Administration and Society* 6 (4): 445-488.

ARTICULOS/ARTICLES

La variedad de fuentes genéricas de información del ciudadano y su actitud frente al inmigrante. TIC y Análisis de Correspondencia Múltiple / Variety of citizens' generic information sources and attitudes towards immigrants. ICT and Multiple Correspondence Analysis Ana María López Narbona	Págs 9-34
El análisis de redes sociales como instrumento del Trabajo Social frente a la COVID 19 / Social network analysis as a tool of Social Work in the face of COVID 19 Joaquín Castillo de Mesa	Págs 35-60
La construcción teórica del objeto en Trabajo Social: un análisis empírico basado en la formación de segundo ciclo / Theoretical construction of Social Work's object of study: an empirical analysis based on second cycle training Pablo Álvarez-Pérez y Jorge Manuel Ferreira	Págs 61-95
Proceso de implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre como estrategia comunitaria para abatir la inseguridad alimentaria / Implementation process of the National Crusade against Hunger as a community strategy to reduce food insecurity Luz Mercedes Verdugo Araujo, Leonor Tereso Ramírez y Luis Alberto Velarde Osuna	Págs 97-108
In/dependencia de hombres y mujeres en cuatro producciones de Disney y su impacto social / In/dependence of men and women in four Disney productions and their social impact Rocío López-García-Torres y Elia Saneleuterío	Págs 109-121

RESEÑAS/REVIEWS

Del-Fresno, M. (Editor), Hernández-Echegaray, A. (Coordinadora) Técnicas de diagnóstico, intervención y evaluación social / Social diagnosis, intervention and evaluation techniques, Editorial UNED, Madrid, 2019 (por Belén Peyró Outeiriño)	Págs 123-127
Rafael Acebes Valentín (ed.). Comunicación para el bien común / Communication for the common good, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2020 (por Lidia Torres Ortiz)	Págs 129-132